

Detenciones arbitrarias generalizadas y violaciones de garantías procesales en El Salvador crean preocupación sobre derechos humanos y el financiamiento estadounidense para seguridad en el país

Los días 24, 25 y 26 de marzo, el pueblo de El Salvador vivió un fin de semana con una de las cifras de muertes más alta desde el final del conflicto armado en 1992, una ola de violencia que fue ampliamente atribuida a las pandillas.

En las semanas siguientes al alarmante aumento de homicidios, el número de detenciones a lo largo del país, hechas en el marco de un Estado de Excepción, ascendió rápidamente a aproximadamente 12.000, muchas de las cuales fueron denunciadas por testigos y familiares como detenciones arbitrarias.

Para quienes fueron detenidos inicialmente, el periodo de quince días de detención sin cargos, en virtud del Estado de Excepción, ha terminado o terminará pronto. Sin embargo, la magnitud de las detenciones, las amplias reformas legales y las [amenazas](#) del presidente Bukele de que los presos cumplirán condenas de décadas, sin goce de sus [derechos humanos básicos](#), incluyendo la alimentación, nos causan serias preocupaciones, entre ellas la posibilidad de que no se restablezca el derecho al debido proceso y que se pueda agravar el ya extendido problema de las detenciones prolongadas, especialmente dada la reciente eliminación del límite de dos años para la detención provisional¹.

Lo anterior tiene como base los hechos ocurridos el 27 de marzo, cuando con el apoyo del poder legislativo, el presidente Bukele respondió al repunte de homicidios con un Estado de Excepción de treinta días, con el cual quedan suspendidas varias garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la intimidad, permitiendo así que el Estado pueda interceptar la correspondencia sin orden judicial, entre otras acciones que rompen las garantías y derechos a la ciudadanía. También se amplió el periodo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, durante los cuales una persona puede ser retenida sin ser informada del motivo de su detención, sin que su caso sea llevado ante un juez y sin acceso a un abogado. Muchas de estas medidas violan tratados internacionales de derechos humanos².

Aunque el presidente Bukele afirmó que está persiguiendo a personas vinculadas a pandillas -a los que se refiere con frecuencia como "terroristas"-, el estado de excepción ha dado vía libre a la policía y al ejército para realizar detenciones basadas únicamente en la sospecha.

Los movimientos sociales populares y activistas de derechos humanos de El Salvador han dejado claro que la desigualdad social, la concentración de la riqueza y las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la exclusión son las que conducen a estas formas de violencia, la cual tiene un impacto más devastador en las comunidades marginalizadas. Son las y los jóvenes de los barrios de bajos ingresos a quienes les registran las mochilas los policías y militares, y son sus madres quienes acuden a las cárceles para tratar de encontrar a sus hijos; los cuales a su vez sufren la violencia generada por las pandillas y los impactos del aumento de la militarización y los abusos del gobierno bajo este estado de excepción.

Tras la puesta en marcha del Estado de Excepción, el gobierno de Bukele propuso una serie de reformas del código penal y otras leyes que se tramitaron con dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa, entre ellas el aumento de 9 a 45 años de pena máxima por ser miembro de una pandilla, así como la creación de penas de diez años de prisión para niños de tan solo 12 años, y 20 años para jóvenes de 16 años de edad. Las reformas legales para tipificar como delito la publicación de materiales "alusivos" a las pandillas o "la reproducción y transmisión de mensajes u otros comunicados que provengan, o se presuma que provienen, de dichos grupos delictivos" han sido denunciadas como un intento de censurar a los medios de comunicación, dado que criminalizan a los periodistas.

¹ [Continúan los cuestionamientos a Régimen de Excepción \(laprensagrafica.com\)](#)

² [UN: Government Crackdown on Gangs in El Salvador Violates Human Rights Law \(voanews.com\)](#)

Si bien la respuesta del gobierno salvadoreño a ese fin de semana cargado de violencia mortal es extremadamente preocupante, esta solo fue posible gracias a décadas de políticas de "mano dura" contra las pandillas; medidas que se han arraigado profundamente en El Salvador, e incluso han contado con un importante apoyo de los Estados Unidos, el cual ha gastado cientos de millones de dólares en El Salvador, para promover la policía militarizada y punitiva y el encarcelamiento masivo como "soluciones" a la delincuencia y la violencia, reflejando su propia política interna.

Desde el apoyo a una ley antiterrorista en 2006, basada en la Ley Patriota de EE.UU³, la cual fue invocada posteriormente para perseguir a los miembros de pandillas⁴, hasta la ayuda en la construcción de celdas de máxima seguridad⁵, Estados Unidos ha sido un socio activo y un importante financista de gran parte del aparato que se utiliza actualmente en la proclamada guerra contra las pandillas del presidente Bukele. Mientras tanto, los cambios sistémicos tan necesarios, las políticas preventivas holísticas y los programas de reincorporación han carecido de recursos financieros y se han enfrentado a muchos obstáculos políticos.⁶

También hay muchos indicios de que los salvadoreños están siendo desplazados de sus comunidades de manera progresiva, tal como lo muestran los datos de aprehensión en la frontera sur de Estados Unidos del año pasado. Nos preocupa profundamente que la violencia policial y militar y la creciente amenaza de detenciones arbitrarias obliguen aún más a las personas a huir de sus comunidades, a pesar de la ruta migratoria peligrosa e incluso mortal.

Nosotros y nosotras, las organizaciones de derechos humanos, legales, de solidaridad internacional y de la comunidad salvadoreña en la diáspora abajo firmantes, declaramos nuestra profunda preocupación por la grave situación de aumento de la violencia y la persecución que enfrenta el pueblo salvadoreño y expresamos lo siguiente:

Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de todas las formas de violencia en curso en El Salvador.

Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que ponga fin a las constantes violaciones de los derechos humanos, especialmente aquellas en contra de las personas de las comunidades marginalizadas que ya son víctimas de la exclusión económica y la violencia de las pandillas, además de un gobierno que las estigmatiza. Asimismo, exhortamos que se respete el derecho al debido proceso, protegido internacionalmente, lo que incluye a las personas detenidas en virtud del estado de excepción.

Denunciamos el abuso de la prisión preventiva, el cual se ha generalizado en El Salvador, incluso contra los presos políticos; así como la reciente decisión de la Asamblea Legislativa de eliminar el límite de dos años de detención provisional, abriendo así la puerta a una profunda y duradera injusticia.

Rechazamos los intentos del presidente Bukele de caracterizar a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas y a los líderes de los movimientos sociales que se organizan contra sus ataques a la democracia como "simpatizantes de las pandillas" y "terroristas", y reconocemos la peligrosa base que se está sentando para aumentar la persecución política, que ya es característica del gobierno de Bukele.⁷

Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a su complicidad en la promoción de la militarización y las respuestas punitivas a la violencia de las pandillas, y de las violaciones rutinarias de los derechos humanos que de ellas se derivan; y a que adopte medidas rápidas y decisivas para retirar la ayuda a las fuerzas militares y policiales de El Salvador, así como a otras instituciones implicadas en el atropello de las libertades civiles y los derechos democráticos y humanos.

³ [El Salvador: Repression in the Name of Anti-Terrorism \(cornell.edu\)](https://cornell.edu)

⁴ [El Salvador Now Using Anti-Terrorism Law to Tackle Gangs \(insightcrime.org\)](https://insightcrime.org)

⁵ [PFG-Scorecard-IV-ENGLISH-FINAL.pdf \(usembassy.gov\)](https://usembassy.gov)

⁶ [USAID in El Salvador: The Politics of Prevention – Against the Current \(againstthecurrent.org\)](https://againstthecurrent.org)

⁷ [Ruling Party Continues Strategy of Criminalization Against Salvadoran Social Organizations and Universities | CISPES](https://cispes.org)

Nos comprometemos a permanecer atentos a la situación en El Salvador y a seguir haciéndonos eco de las denuncias de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las comunidades marginalizadas y los líderes de los movimientos sociales contra las violaciones de sus derechos fundamentales y cualquier abuso de poder por parte del Estado.

Firmantes:



- Alianza Americas
- Anakbayan San Jose
- Anakbayan-USA
- Atlantic Regional Solidarity Network
- Bay Area Cuba Saving Lives Committee & The Alternatives Project
- BAYAN USA
- Cambridge El Salvador Sister City
- Central American Graduate Student Collective at UCI
- Central American Resource Center-DC (CARECEN-DC)
- Central American Resource Center-Los Angeles (CARECEN-LA)
- Centro Cultural TECHANTIT
- Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
- Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)

Comité Europeo de Solidaridad con El Salvador (CESES)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Congregation of Sisters of St. Agnes Justice, Peace and Integrity of Creation Office
Congregation of St. Joseph Peace and Justice Team
Denver Justice and Peace Committee
Diasporic Salvis
Doctors for Global Health
Dominican Sisters - Grand Rapids
Dominican Sisters of Houston
Dominican Sisters of Sinsinawa Peace and Justice Office
Erie Benedictines for Peace
Friendship Office
GABRIELA - Stanford
Grupo primero de abril
Guatemala Solidarity Project
Homies Unidos
Huron Valley Democratic Socialists of America
ICHRP Seattle
IHM Sisters Justice, Peace and Sustainability Office
Interfaith Welcome Coalition - San Antonio
InterReligious Task Force on Central America
Justice and Peace Office, Sisters of St. Joseph of Boston
Justice Committee Sisters of St. Joseph of Carondelet, Albany Province
Kitsap Advocating for Immigrant Rights and Equality (KAIRE)
Latin America Caucus of Interfaith Council for Peace & Justice
LatinxFaculty4BlackLivesMatter
Madison Arcatao Sister City Project
Massachusetts Peace Action
Migrant Roots Media
Mill Valley Film Group
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Nicaragua Center for community Action
Office of Peace, Justice, and Ecological Integrity/Sisters of Charity of Saint Elizabeth
Olympia Movement for Justice and Peace
Palestine Solidarity Committee - Seattle
Pax Christi USA
Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness
Resistencia Comunitaria
Sacramento State, Center on Race, Immigration, and Social Justice
Salvadoran Leadership and Education Fund (SALEF)
San Francisco Committee for Human Rights in the Philippines
School of the Americas Watch
Sisters of Mercy of the Americas - Justice Team
Sisters of Providence of Indiana Leadership Team
Sisters of St. Francis of Philadelphia
Sisters of the Humility of Mary
Society of Helpers
The League of Filipino Students at San Francisco State University
The Mauricio Aquino Foundation Corporation
Unitarian Universalist Service Committee
Unite North Metro Denver
US-El Salvador Sister Cities
Witness at the Border

Women Against Military Madness